Imprimir

Después de treinta años de tentativas tortuosas, el Estado emprende otra negociación con la guerrilla del ELN, por cierto la última histórica en un país en el que han pululado las guerrillas, los focos subversivos y los ejércitos revolucionarios; y en el que a cada sublevación – conservadora, liberal o marxista – , la sucede otra como si se tratara de un sino, a la vez trágico y romántico; eso sí, casi siempre sin éxito, si es que éste pudiese medirse con la vara de la meta suprema, la de la toma del poder.
Tal vez haya sido la de Simón Bolívar, la única guerrilla, que cumpliera con esa meta de una manera duradera, solo que desde entonces ya ha pasado la friolera de doscientos años. Lo consiguió en una nación que empezó a construirse de un modo precario, motivo por el cual terminó sembrada de guerras civiles, poblada por caudillos levantiscos y por ejércitos de rebeldes, animados todos por la ilusión de que encarnaban la solución, cuando probablemente eran apenas la manifestación del problema, de esa hechura inacabada y fragmentada de nación excluyente; de un Estado incapaz de controlar el territorio y monopolizar las armas.

Condiciones nuevas para el acuerdo

Claro está que también concurren otras razones que alientan las esperanzas para un acuerdo. En la cúpula de las dos partes, que intervienen en este conflicto asimétrico, han sobrevenido cambios no desdeñables que pueden influir en la búsqueda de una atmósfera de confianza mutua para abrir la negociación. Al Estado arribó un gobierno de izquierda, el de Gustavo Petro, condición que le puede ofrecer cierta tranquilidad a una guerrilla especialmente arisca, cuando se trata de avanzar hacia una reconciliación política. Fue algo que flotó en el espíritu optimista de las dos delegaciones; incluso se percibió un ánimo alegre el día inaugural de las conversaciones, con discursos improvisados y plenos de voluntarismo.

Así mismo, a la cabeza del ELN ha llegado un primer comandante – Antonio García – con mayor capacidad de elaboración reflexiva en el campo de la política tanto nacional como internacional; lo cual contrasta con las fijaciones un tanto básicas del cura Pérez, primero; y, luego, de Gabino, un viejo militante de origen campesino. Tal advenimiento, el de un cambio

en el liderazgo, es una circunstancia sobreviniente, favorable al allanamiento de puntos comunes para un entendimiento crítico sobre el contenido de la agenda.

“El ELN no pide nada para sí”: He ahí tal vez un obstáculo

Otras razones, relacionadas con factores de fondo, invitan sin embargo mucho menos al optimismo. Ellas tienen que ver con la identidad de la guerrilla, esas razones que justifican su existencia y se convierten en una auto-referencia revolucionaria. A impulsos de una auto-referenciación ideológica, el ELN se definió como sujeto revolucionario y como grupo alzado en armas. Se trata sin duda de una auto- determinación interna y profunda. Claro que también posee un referente externo; es decir aquello que existe por fuera de su subjetividad, aunque la determina intensamente. Es el de las causas sociales, las de la desigualdad, las de la pobreza y la explotación.

Puesto que existen estas últimas, el ELN se caracteriza a sí mismo como un movimiento revolucionario; y ya que lo es, ha procedido desde su nacimiento a constituirse en un grupo armado, un ente histórico que hace uso de la violencia, casi como si fuera algo sustanciado. Se trata de una postura esencialista; que el actor colectivo reafirma como punto de partida ineludible para cualquier negociación. Lo cual puede no ser una traba insuperable; lo será en cambio, si los combatientes insisten en conservar esa condición, más allá de la firma de un acuerdo.

Pero resulta que toda negociación para solucionar el conflicto armado interno debe concluir con la eliminación de este último y por lo tanto con la lucha violenta, por más que el actor se haya esforzado por legitimarla con motivos morales y con las causas históricas.

Ahora bien, la guerrilla quisiera negociar, pero sin que saliera sacrificada su condición de agente revolucionario; esto es, sin que esa negociación le afectare su esencia revolucionaria, ergo su naturaleza de grupo revolucionario armado.

Antonio García, el número uno, ha criticado los procesos de paz anteriores, incluido el muy importante, finiquitado en 2016, entre el gobierno de Santos y las FARC, estas últimas, el

interlocutor que en ese entonces hizo dejación ante Naciones Unidas de las armas. Justamente ha cuestionado dichos procesos porque, en su opinión, estaban alentados solo por el objetivo de esa dejación, lo que por otra parte vendría a ser el hecho, que fundamentaba el propósito del Estado y las élites.

Pero no es cierto que haya sido a cambio de nada este abandono de las armas. Las FARC les dijeron adiós a las armas; y mucho antes el M-19 y el EPL, no para desaparecer sino para convertirse en movimientos políticos de carácter legal; incluso, la ex -guerrilla comunista consiguió una representación en el Congreso, concesión política del Estado que sin embargo no le merece una valoración positiva al jefe del ELN.

“La paz no puede seguir entendiéndose como desmovilización de los rebeldes para que todo siga igual; y unos cuantos guerrilleros desmovilizados sean parlamentarios”; es lo que le dijo el comandante a Red +Noticias en septiembre.

Y, por contraste, remitió inmediatamente las cosas al sentido verdadero de la paz, el de la superación de las causas estructurales de la violencia. Lo planteó al mismo medio, de este modo: “Los objetivos de un proceso de paz (sic) es que se solucionen los problemas de Colombia y de sus gentes desprotegidas y en la miseria; esa es nuestra meta”. Es un enunciado que puede sonar bien en términos estructurales; o, dicho de otra manera, en una perspectiva maximalista.

Los riesgos de una perspectiva maximalista

Solo que las negociaciones de paz, a menudo, han sido posibles, gracias a que las partes, que se sientan en la mesa, reconocen que no deben frenar el camino de la paz, a la espera de garantizar los cambios estructurales de la sociedad. O, en otras palabras, no deben aguardar a que la negociación entrañe una revolución, la misma que no sobrevino por el efecto de las armas en el campo de batalla.

Una negociación que no consiga remontar esa visión meramente estructural y maximalista no será negociación. Ésta debe encontrar las condiciones para una legalidad democrática,

como consecuencia de un acuerdo de paz, en la que los enemigos, convertidos en adversarios, continúen la lucha por las transformaciones sociales.

De ahí que su horizonte cierto sea el de terminar con el conflicto armado. Un conflicto que es solucionable, precisamente porque no es equivalente a un juego de suma cero, en el cada contendiente gana o pierde todo; sino un juego de suma con motivación mixta, en el que cada uno puede ganar o perder algo simultáneamente; o sea, en el que ambos jugadores pueden ganar al mismo tiempo. Lo cual es posible, casualmente, a través de una negociación, ese reverso y al mismo tiempo prolongación, del enfrentamiento violento; un proceso en el que se intercambian intereses y reivindicaciones; y que, en este caso, tendrá como punto de partida el plan consensuado hace cuatro años entre la guerrilla en cuestión y el gobierno de Santos, mejorable, claro está.

Ricardo García Duarte

Foto tomada de: CNN en Español